

parte del art. 22 de la Constitución, que declara abolida la pena de infamia:

Que con respecto á la resistencia que opuso el C. Gefe Político de dar cumplimiento al auto de suspensión, decretado por el Juez de Distrito, apareciendo que dicha autoridad, requerida por su superior inmediato, suspendió al fin sus procedimientos; razon por la cual no es llegado el caso previsto por el art. 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, para proceder á encausar á la expresada autoridad, por su resistencia.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal y 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato, en 26 de Agosto del presente año, en la parte que declara: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á Nicolás Lazarin, Cristóbal Soto, Rafael Manríquez, Abraham Oliveros y Antonio Rangel contra los procedimientos del Gefe Político de Apaseo, que los condenó á barrer las calles y plazas y á otros trabajos de policía, violando así el art. 21 de la Constitución, que no autoriza para imponer estas correcciones, y el 22 que las prohíbe, porque imprimen infamia.

2º: Se revoca la parte de la misma sentencia, que dispone que devueltos que sean los autos por la Superioridad, se saquen testimonios de lo conducente para proceder á lo que en derecho haya lugar, contra el C. Domingo Rábago, Gefe Político de Apaseo, por haber desobedecido el auto de suspensión.

Devuélvensen los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Ansa.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Artega.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de*

Castañeda y Ndjera.—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 6 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el C. T. Rodriguez, en representacion de su hijo Austacio del mismo apellido, contra los autos del Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que las pruebas rendidas por la parte quejosa en este juicio de amparo, durante el término que conforme á la ley relativa tuvo á bien conceder el Juzgado, no bastan para destruir los fundamentos en que descansa el pedimento de 4 del corriente, contraído á que se deniegue el amparo que se solicita por Austacio Rodriguez contra el acto de la Autoridad política de la Ciudad de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena, con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, por robo con asalto y muerte cometido á inmediaciones del rancho de "Caja pinta," en los primeros dias del mes de Marzo del corriente año; y por lo mismo, se ve en el duro pero preciso caso, de insistir en su referido pedimento, en ejercicio de su ministerio.

Las pruebas de que se ha hablado, tienden única y exclusivamente á justificar que la sentencia por la cual la autoridad de Linares condenó á muerte á Rodriguez, fué pronunciada fuera del término de 15 dias, que la citada ley de 3 de Mayo demarca en su art. 3º, para la conclusion del juicio cri-

minimal respectivo. Este punto no necesitaba justificación; estaba comprobado, no solo por el dicho del quejoso, sino también por la relación que de los diversos trámites de la causa hizo en su informe la autoridad; y estaba por lo mismo fuera de toda duda; pero si esto es cierto, no lo es menos que con tal hecho nada se ha avanzado en pró de los fundamentos de la queja de anaparo interpuesta, porque según queda dicho en el anterior dictámen, y se repite en el presente, el lapso de términos legales para juzgar y sentenciar, no hace incompetente al Juez de la causa, como lo pretende el quejoso; aunque sí lo constituya responsable como lo declaró expresamente el Reglamento de 23 de Mayo de 1871, en la frac. 2ª de su art. 17, expedido por el Ejecutivo Federal en virtud de la autorización que le concedió el Congreso en el art. 49 de la ley que para saltadores y plagiarios se promulgó el 18 del mismo mes de Mayo, cuyas disposiciones si bien no están vigentes hoy por haber transcurrido ya el tiempo de su duración, hacen ver claramente la consecuencia del lapso de término á que se viene aludiendo, con tanta mas razón, cuanto que la ley de 3 de Mayo con arreglo á la cual se juzgó y sentenció á Rodriguez, y la de 18 del mismo mes de 1871 que se acaba de citar, reconocen el mismo origen y fundamento y tienden al mismo fin, y sus disposiciones son exactamente las mismas, como que la primera no es sino la segunda, cuyas prescripciones han venido prorogándose, por decirlo así, hasta la fecha, además de que entre las causas de incompetencia reconocidas por derecho, no se encuentra la alegada por Rodriguez. Así es que la garantía que la Constitución federal otorga en su art. 16, no ha sido violada en la persona del quejoso, pues la autoridad que lo juzgó y condenó á muerte, fué la establecida por la ley citada de 3 de Mayo, de que nacia su jurisdicción y por lo mismo la competente á pesar del transcurso del término fijado en ella para la conclusión de la causa.

TOMO VI.—PARTE II.

Ahora bien, por lo que toca á la violación que también se alega de las garantías consignadas en los arts. 13, 20 y 21 de la Constitución política de la República, basta considerar que ellas están suspensas para los saltadores y plagiarios, y que debe tenerse entre los primeros á Rodriguez, porque no solo no rindió prueba en contrario, pero ni siquiera ha manifestado inconformidad con la calificación de la autoridad que lo juzgó, tanto en lo relativo al delito como á su autor, pues ella muy claramente expresa que sentenció á Rodriguez por haber sido autor de un robo con asalto, y sobre esto se ha guardado profundo silencio por el occurrente, lo cual no puede indicar mas, sino su aprobación y conformidad con el delito que se le imputa.

Si para Rodriguez estaban suspensas tales garantías, no puede, propiamente hablando, decirse que se lo han violado, pues no hay violación posible de garantías de que no se disputa. Sin que pueda objetarse razón alguna contra la aplicación de la citada ley de 3 de Mayo, una vez comprobado el hecho de ser saltador aquel á quien se juzga conforme á ella, pues la suspensión de garantías que contiene, se decretó con arreglo á los preceptos constitucionales; de que se infiere que tal disposición es una ley constitucional, emanada, por lo mismo, de la Constitución, y como tal, según el art. 126, debe ser respetada y obedecida como Suprema ley de toda la Union, y los jueces de cada Estado á quienes se encomienda su ejecución, deben arreglarse en un todo á ella.

La constitucionalidad de la ley es patente, y para convencerse de ello no se necesita esfuerzo alguno, porque si el art. 19 de la Constitución federal reconoce como base y objeto de las instituciones sociales, los derechos del hombre, y declara que todas las leyes y todas las autoridades deben respetar y sostener las garantías que ella otorga, también su art. 29 permite que entre otros casos, se puedan suspender algunas de esas garantías, en el modo y términos que en él

se establece, cuando la sociedad se encuentra en grave peligro ó conflicto, y se comprende que uno de los mayores peligros para la sociedad es la plaga del bandalismo, que en la República rápidamente iba desarrollándose. Con estos artículos de la Constitución, así como con el 23 que dejó subsistente la pena de muerte para los saltadores, se confirma en un todo la repetida ley de 3 de Mayo; así es que ni el carácter de anticonstitucional que quisiera dársele por el quejoso, podría en manera alguna favorecerle, porque en vano se esforzaría en demostrarlo.

Por tales consideraciones, y reproduciendo lo expuesto en el dictámen anterior, el suscrito cree que la queja de Rodríguez no está comprendida en la fac. 1ª, art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y por lo mismo pide al Juzgado se sirva declarar que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Austacio Rodríguez contra los efectos de la sentencia que lo condenó á muerte por el delito de robo con asalto.

Montreay, Julio 25 de 1874.—*Lic. S. Roel.*

El dictámen á que se refiere el anterior, es el siguiente:

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Que el C. Toribio Rodríguez, vecino del rancho de la "Caja pinta," jurisdicción de Linares, ha ocurrido al Juzgado como padre de Austacio Rodríguez pidiendo amparo contra el acto del C. Alcalde 1º de aquella Ciudad, que encausó y sentenció á la última pena, conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873, á su citado hijo por el delito de robo con asalto perpetrado á principios del mes de Marzo último, á inmediaciones del referido rancho de "Caja pinta," por creer el ocurrente que se han violado en la persona de su hijo algunas de las garantías individuales que otorga la Constitución de la República.

Decretada la suspensión previa del acto que se reclama, y recibido ya el informe con justificación que rindió la autoridad res-

ponsable, conforme á la ley de la materia, pasa el que suscribe á emitir su opinión en cuanto á lo principal del juicio promovido.

El quejoso en su escrito relativo asegura que las garantías que han sido violadas en su hijo, son las que se consignan en los artículos 20 y 21 de la Carta fundamental de 5 de Febrero de 1857, aunque en el curso del mismo escrito deja entender claramente que la violación se extendió á las garantías que otorgan también los arts. 13 y 16 de la misma Carta, supuesto que se propone demostrar que la ley de 3 de Mayo es una ley privativa; que su hijo fué juzgado por un Tribunal especial y que el Alcalde 1º que lo condenó á la última pena, fué incompetente para ello. Así es que convendrá en el presente caso, examinar si fueron en efecto violadas todas ó algunas de las garantías que al hombre otorga la Constitución de 1857 en sus arts. 13, 16, 20 y 21, como lo asienta el quejoso, según se ha dicho, á fin de procurar el acierto en la resolución que deba decretarse, aunque por ahora habrá de limitarse tal exámen á lo que pueda inferirse de solo el escrito del Sr. Rodríguez y del informe rendido por la autoridad, que son las únicas piezas que se registran en el expediente, sin perjuicio de que el Promotor, en vista de las pruebas que se rindan en el tiempo oportuno, si algunas hubiere, pueda rectificar ó modificar la opinión que en este pedimento emita.

Habiendo sido la ley de 3 de Mayo de 1873 expedida por el Soberano Congreso de la Union, con todos los requisitos constitucionales y de toda conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Constitución de 57, y no habiendo sido dada para juzgar á persona alguna determinada, sino á todo aquel que llegare á cometer el delito de robo con asalto ó plagio, no puede decirse que ella sea una disposición privativa, ni tampoco que establezca un Tribunal especial encargado de juzgar y sentenciar á los reos de aquellos delitos, supuesto que su ejecución está encomendada, como lo dice en su

art. 32, al Gefe de la fuerza aprehensora ó á la autoridad política, ya de la federacion ó bien del Estado, cuyos agentes hicieran la aprehension; lo cual dista mucho del establecimiento de un Tribunal especial; de donde se infiere, que no se ha violado en la persona del hijo del quejoso la garantía del art. 13, con el hecho de habérsele juzgado y sentenciado con arreglo á la citada ley de 3 de Mayo.

Mas en el supuesto de que pudiera decirse, con mas ó menos razon, que la ley de que se trata es una ley privativa y que establece Tribunales especiales para saltadores y plagarios, todavia así no puede alegarse la violacion del art. 13, supuesto que la garantía consignada en su 13 parte está suspendida por el art. 19 de dicha ley, exclusivamente para los saltadores y plagarios, y entre los primeros se ha reputado al hijo del ocurrente, segun consta en el informe de la autoridad responsable; y por el silencio que sobre el particular guarda el quejoso, se advierte que está conforme con la calificación del delito de robo con asalto, hecha por aquella autoridad; por consiguiente, el primer fundamento de la queja de amparo, que se hace consistir en la violacion del art. 13 de la Constitucion política de la República de 5 de Febrero de 1857, no existe.

El segundo, ó sea la violacion que se alega del art. 16, tampoco existe; porque segun hemos visto antes, la ley tantas veces citada de 3 de Mayo, previene en su art. 32, que si los delinquentes ó reos de robo con asalto ó plagio, no fueran aprehendidos infraganti, sean juzgados sumaria y verbalmente por las autoridades, cuyos agentes hayan hecho la aprehension, lo cual muy claro dice que dichas autoridades, y aun los Gefes de fuerza, en caso de aprehension infraganti, son competentes para conocer y fallar en las causas de robo con asalto ó plagio. Si, pues, el Alcalde 1º de la Ciudad de Linares, cuyos agentes aprehendieron al hijo del ocurrente, levantó el acta

verbal que proviene la citada ley de 3 de Mayo, y considerando probado el delito de robo con asalto que trataba de averiguar; y justificado que Anastacio Rodriguez habia sido uno de los autores del mencionado delito, lo condenó á la última pena; no hay motivo para decir que se infringieron molestias por una autoridad incompetente, sin que valga que el término de quince dias fijados por la ley para tales juicios con el carácter de improrrogable, habia transcurrido con exceso para cuando se pronunció el fallo, pues este lapso de término, si puede hacer responsable á la autoridad, en ningun caso implica falta de jurisdiccion ó incompetencia, para seguir conociendo en el juicio pendiente.

Las garantías consignadas en los arts. 20 y 21 de la Constitucion, tampoco fueron violadas por la autoridad política que enjuició y sentenció á Anastacio Rodriguez; ó mejor dicho, la violacion de los citados arts. 20 y 21, en el supuesto de haberla, no puede alegarla el reo, porque siendo, como se ha visto, autor de un delito de robo con asalto, para él están suspensas las garantías que á todo hombre otorgan los mencionados artículos.

En consecuencia de lo dicho, y reservándose el Promotor rectificar su juicio al formular su alegato, tiene la pena de sugetar á la ilustracion del Juzgado, la proposicion siguiente:

Unica: La Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Anastacio Rodriguez contra los efectos de la sentencia que pronunció en su contra, el 1º de Junio próximo pasado, el O. Alcalde 1º de Linares, condenándolo á la última pena por el delito de robo con asalto.

Monterey, Julio 4 de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifico. Monterey, Agosto 12 de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Agosto 6 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Toribio Rodriguez en representacion de su hijo Austacio del mismo apellido, contra los actos del C. Alcalde 1º de Linares, por los que juzgó y sentenció á éste á la última pena, conforme á la ley de salteadores y plagiarios de 2 de Mayo de 1873, indicando el quejoso que se violaron las garantías que otorga la Constitucion general, en la primera parte del art. 13, y en el 16, 20 y 21; habiéndose seguido despues el juicio, por el C. Pedro Quintanilla, con poder del reo.

Vistos: el auto en que se mandó suspender la ejecucion del acusado, y el oficio del C. Alcalde 1º, obsequiándolo; el informe de la misma autoridad en que dice que juzgó y sentenció á Austacio Rodriguez como salteador, conforme á la expresada ley de Mayo; y que si bien es cierto que la causa se falló despues de quince dias de reducido el reo á prision, fué porque hubo necesidad de hacer varias consultas y aún de resolver quién fuera el Juez competente; el pedimento fiscal, solicitando que se decreta que no ha lugar al amparo; las pruebas rendidas por el quejoso y los alegatos presentados por el C. Promotor fiscal y por el apoderado del reo, pidiendo el primero que se declare que no procede el amparo, y el segundo insistiendo en él, principalmente por la violacion de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion, porque el Juez falló despues de quince dias de estar el reo preso, cuando ya no era competente; y todo lo demas que obra en este juicio, y

Considerando: Que el Congreso de la Union, de conformidad con las facultades que le acuerda el art. 29 de la Carta fundamental de la República, mandó suspender, por su decreto de 2 de Mayo del año pasado, para los salteadores y plagiarios, las garantías de que hablan los arts. 13 y 19 en su primera parte, y 20 y 21 de la Constitucion.

Que Austacio Rodriguez ha sido condenado como salteador, cuya circunstancia no ha negado, ni tratado de justificar lo contrario, siendo de presumirse que en efecto lo es, por estar la razon en favor de la autoridad que lo juzgó como tal, y porque siendo aquel el actor en este juicio, nado ha probado como debia haberlo hecho; estando, por consiguiente, suspensas para él las garantías de que habla el decreto citado, sin que las pueda alegar como un derecho.

Que dicho reo fué aprehendido por la policia de Linares, la cual depende y es agente de la autoridad política, siendo, por tanto, competente el Alcalde 1º de dicha Ciudad conforme á la expresada ley de salteadores y plagiarios, sin que se haya violado la garantía que otorga la Constitucion en su art. 16.

Que aunque la expresada autoridad fallara la causa, despues de quince dias de estar el reo á su disposicion, no dejó por eso de ser competente, como no deja de serlo cualquiera otro Juez que falla despues del lapso del término que la ley le concede para sentenciar; porque la jurisdiccion se acaba solamente cuando la autoridad funge despues que ya no lo es, y porque cuando mas habria derecho á exigirla la responsabilidad, si falla despues del término.

Y considerando todo lo que considerar convino, y con fundamento en las disposiciones citadas en el art. 101 de la Constitucion general, y ley de 20 de Enero de 1869, y de conformidad con el pedimento fiscal, el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando, dijo:

1º: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Austacio Rodriguez contra los actos del Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena.

2º: Que se publique esta sentencia en el Periódico Oficial de este Estado, se saquen las copias correspondientes, y se remita este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Notifíquese. El expresado C. Juez así

lo decretó y firmó, por ante mí el Secretario, de lo que doy fé.—*Lic. F. Valdés Gómez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterrey, Agosto 4 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el C. T. Rodriguez en representacion de su hijo Austacio del mismo apellido, contra los actos del Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873 relativa á salteadores y plagiaros; vista la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo y las demas constancias que obran en autos, se decretar:

Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada en 6 de Agosto del presente año, por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, cuya parte resolutive dice:

Que la Justicia federal no ampara ni protege á Austacio Rodriguez, contra los actos del C. Alcalde 1º de Linares que lo juzgó y sentenció á la última pena.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 5 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Manuel Terreros, contra el C. Administrador de Rentas del Distrito de Cuauhtlan, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que juzgó conveniente que siguiera el juicio promovido por el C. Manuel Terreros, porque el escrito en que solicitó el amparo está arreglado á derecho, y por que se alegó la violacion de algunas garantías consignadas en la Constitucion general; reservándose pedir en el alegato lo que estimara justo con vista de las pruebas que se rindieron, las cuales algunas veces hacen variar el concepto que se forma á la iniciacion de un negocio.

Es llegado el caso y sin embargo debe hacerlo sin mas datos que los que tuvo cuando contestó el traslado de tres dias, porque el Juzgado estimó que no habia necesidad de prueba y el peticionario estuvo conforme.

Así es que, el que habla emitirá el juicio que formó cuando el negocio se inició, el cual creyó estaba sugeto á variacion y pedirá lo que corresponda en derecho.

El procedimiento de que se queja el C. Manuel Terreros, no importa la violacion de una ó mas garantías, primero, porque el artículo 124 de la Constitucion federal, tal cual está redactado, y en el estado que las cosas se conservan hace 17 años, no contiene garantía alguna, y por consiguiente hubo competencia en el empleado de Hacienda que ejecutó el acto reclamado; segundo, porque como lo confiesa el promovente, la garantía del artículo 4º es, salva la facultad del Gobierno, de pedir al individuo una parte de los productos de su trabajo por via de impuesto, así como la del 27 reconoce por limitacion el impuesto.

Bajo este concepto el que suscribe, con